



HUMANISTA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Consejo Editorial

Eloy Salmerón Díaz
Presidente
Victorino López Gonzaga
Director
CONSYCOMER SA DE CV
Estilo y Diseño Grafico

Edición
CONSYCOMER SA DE CV
Impresión:
Calle 2, Colonia Icacos,
Número 4, C.P. 39860,
Acapulco de Juárez,
Guerrero.



¡¡¡GRACIAS, XÓCHITL!!! NUESTRA LUCHA DEBE CONTINUAR. ES BREGA DE ETERNIDAD.

*La defensa de la democracia liberal necesita hombres de acción
dispuestos a bajar a la arena donde los focos arden, las masas
rugen y la exposición es total.*
Cayetana Álvarez de Toledo

En mi larga vida política, un evento viene a mi memoria: el movimiento estudiantil de 1968 que viví plenamente por ser presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho en Xalapa. El 26 de septiembre fue reprimida una manifestación y mis compañeros y yo fuimos encarcelados.

Los primeros días estuve solo en una celda y tuve un raro estado emocional esperando lo peor. Recordé el diálogo sostenido semanas antes con mi paisano Carlos A. Madrazo. Con su peculiar vehemencia, me dijo: “El próximo presidente va a ser Luis Echeverría. Lo único que sabe hacer es decir ‘Sí, señor’, obedeciendo ciegamente a Gustavo Díaz Ordaz. Me recuerda a Tartufo, un personaje de Molière. Salvado México si ese señor llega al poder”. Se cumplió su vaticinio. Aunque el rompimiento con su antecesor fue total, su desempeño fue sumamente dañino para el país.

Su contendiente fue un gran mexicano, Efraín González Morfín, filósofo del derecho y precursor del solidarismo que algunos equiparan con la tercera vía. Tuve la oportunidad de entrevistarlos años después y pude percibir su gran calidad humana. En 1976, el PAN no postuló candidato e incluso se habló hasta de su extinción. Sin embargo, para bien de México, por su mística, su doctrina, su militancia, superó su crisis y fue el impulsor más importante de la transición a la democracia.

Las circunstancias de hoy son similares. El PAN es el único partido con presencia y con ciertas características especiales que lo hacen la institución idónea para evitar mayores males a nuestro país. Sin duda, eso se lo debemos a Xóchitl Gálvez. Su hazaña es monumental. En una ocasión, Efraín González Luna le escribió a Manuel Gómez Morín que la existencia del PAN y su perseverancia sólo se explicaban por una serie de milagros. Así considero a la gran mexicana que es esta hidalguense de origen otomí, ejemplo de superación personal, entre otras muchas cualidades.

Hay un problema. Su tarea apenas empieza. El partido que la ha llevado a diversas candidaturas es dirigido por un mercenario ajeno a los principios panistas. Por lo tanto, le suplico que ejerza el liderazgo que ya logró y lo rescate interviniendo en el proceso de elección del próximo dirigente. Me atrevería incluso a proponer (aún sin cumplir los requisitos) que ella sea la próxima líder partidista, evitando que siga en manos de personajes no calificados para esa importantísima responsabilidad.

Siempre he dicho que una de las fallas de los panistas es que son militantes eventuales. No asumen la profesión política con entrega, contrario a lo que hicieron los fundadores, quienes, sin importar condiciones adversas, burlas, incluso ataques de la peor calaña, apostaron por salvar a México con civilidad y democracia, dándole a la ciudadanía una trinchera digna para participar en política.

Aludía al inicio del texto a mi experiencia en el 68. Ahora me postulé para contender por una diputación local en Tabasco y volví a sentir la pasión de sumar voluntades. Me acredité, además, como representante en el órgano electoral.

Batallamos mucho para conseguir cuidadores de casillas, teniendo que aportar recursos económicos para cumplir con ese deber elemental. A las 11 de la mañana, solamente 10% se presentó. Ahí me percaté que iba a perder, como sucedió, cuando algunas encuestas me otorgaban una holgada preferencia. La persona electa es un empleado de muchos años de Javier May, candidato designado por Andrés Manuel López Obrador y hoy gobernador electo.

Nuestra lucha debe continuar. Es brega de eternidad, pues la democracia es el sistema político de enmiendas continuas. Requiere mujeres y hombres que nunca den por concluida una empresa. Xóchitl tiene la palabra. Le doy las gracias por mantener viva la esperanza. Sería un pecado dejarla morir.

Juan José Rodríguez Prats
Política de principios



PERDIMOS NOSOTROS

POR JORGE TRIANA

Es falso que el pasado 2 de junio la elección haya estado marcada por un sofisticado fraude electoral. Lo que hubo fue una burda operación de Estado sin precedentes. Como en ocasiones anteriores, la elección fue organizada por miles de ciudadanos, y a pesar de los dados cargados de Guadalupe Taddei,

presidenta del INE, no hay forma de advertir fraude en el manejo de los votos. Sin embargo, sí vivimos la elección más violenta e inequitativa de la historia moderna: con presencia del crimen organizado, un uso descarado del presupuesto público, campaña adelantada, falta de neutralidad de las autoridades y la injerencia ilegal del Presidente.

Más allá de la inequidad y de que la contienda no se llevó a cabo en normalidad democrática, la realidad es contundente: la gente votó masivamente por el proyecto de continuidad del actual gobierno, representado por Claudia Sheinbaum. La derrota fue nuestra, de quienes advertimos infructuosamente sobre el talante autoritario de dicho proyecto. La oposición no logró capitalizar la negligencia, los abusos y excesos del gobierno de López Obrador, resultando ser un contrapeso débil, sin llegar a ser una alternativa viable, incluso para muchos inconformes con la administración actual.

Nuestra propuesta fue básica y simplista, sin ofrecer más proyecto que sacar a Morena, sin aprender del fracaso de las elecciones presidenciales del 2018 y dejándonos llevar por el espejismo de las intermedias del 2021. ¿Qué tan mal lo hicimos, que la gente prefirió votar por la continuidad de un gobierno con unos 200 mil homicidios dolosos en su haber?

Permitimos que en México se votara por la continuidad de un gobierno que incrementó en un 150% el número de personas sin acceso a servicios de salud. Se votó por consolidar la militarización de nuestros cuerpos de seguridad y por un ejército encargado de tareas que deben ser exclusivas para civiles, se votó por proyectos de infraestructura inviables y opacos, y por la devastación inmisericorde del medio ambiente. Fuimos incapaces de señalar con contundencia el enorme cúmulo de escándalos de corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, escándalos que llegaron hasta el seno de su familia.

Claudia Sheinbaum fue elegida por cerca de 35.5 millones de mexicanos, 5 millones más que los que apoyaron a López Obrador en 2018. Estos millones de votantes encontraron sentido en los "otros datos" del Presidente. Desde la oposición, nos queda un profundo ejercicio de autocrítica, pues el mensaje es claro: en nuestro estado actual, ya no somos una alternativa viable para la mayoría. El desprestigio de los partidos de la coalición opositora fue la mejor propaganda para la candidata oficial y su coordinador de campaña, el Presidente. En la oposición intentamos que la gente optara por un cambio de gobierno sin cambiarnos nosotros primero, sin haber desterrado antes los mismos errores del pasado que ya nos habían llevado al fracaso.

En estas elecciones, Morena arrasó porque existe una sólida base de votantes impulsada por un aparato propagandístico sufragado con dinero público que votó por la continuidad del actual gobierno, pero también porque millones de personas creen genuinamente en una "transformación" y la oposición no estuvo ni cerca de hacerles dudar. Perdimos desde la oposición porque no supimos convencer a los ciudadanos del momento crítico que vivimos y de las terribles consecuencias de un proyecto político basado en la acumulación desmedida de poder.

La oposición necesita reinventarse totalmente, abandonar el oportunismo efímero de unos cuantos y construir una oferta encabezada por la ciudadanía y, ya después, impulsada por partidos políticos. El reto es inmenso. La democracia mexicana está urgida de una oposición moderna, joven, fuerte, crítica y propositiva que pueda equilibrar el poder y ofrecer verdaderas soluciones a los problemas del país.

La elección del 2 de junio dejó en claro que perdimos nosotros, los de la oposición, pero lamentablemente, también perdió México.



¿Quién gobernará realmente el país a partir de octubre?

Anamari Gomís



Continúan los dimes y diretes de un lado de la oposición, a la que pertenezco. Está cierta mucha gente de que las votaciones del 2 de junio fueron un fraude. Me salí de varios grupos de Whatsapp en los que me habían incluido, cuando varios ciudadanos votamos a favor de Xóchitl Gálvez para que se la considerara candidata a la presidencia

república. De repente, me asomaba a leer lo que escribían personas que no conocía y sigo sin conocer. El 3 de junio volví a echar un ojito a los comentarios y casi todos acusaban que irrumpió la mano negra en las elecciones.

Que si una “sábana” de un distrito de 300 personas presentaba a 700 votantes de Morena, pero la realidad, como explicó Ciro Murayama, reside en que estos distritos abarcan a varios municipios. Que si el fraude lo habían arreglado unos cubanos especialistas en cibernética y en computación y alteraron el resultado de los votos. Que si la Coparmex (¡dioses!), pedía que se hiciera viral un manifiesto.

Me encontré varias veces con los comentarios un Paco Vite, siempre atinados y señalaba las falsedades de la gigantesca falsificación de boletas y actas y de las notas falsas (lo acabo de seguir en Xwitter, es sociólogo). Empecé a meter mi cuchara y los del equipo del fraude me contestaron “que ni cómo ayudarme”. Me salí de todos los grupos, menos de uno, en el que se envían, generalmente, artículos y también participa Paco Vite. Poco tiempo tengo para husmear en ese “chat”, pero allí estoy.

Los votantes de las clases medias, tan vituperadas por López Obrador, y que se inclinaron por Morena, no dicen ni mu, e incluyo a académicos progres. A ellos no les importó la violencia reinante en el país, el desabasto de medicinas, el desorden económico del gobierno, los frecuentes casos de corrupción de los hijos del presidente, de la virtual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y todo lo demás que ustedes ya saben. De acuerdo con mi memoria política, ningún gobierno ha sido tan malo como el de López Obrador.

Anteayer, en León, escribo esto el martes 11, unos cinco miembros de la Guardia Nacional entraron a una casa, donde se encontraban cuatro mujeres y dos bebés. Salieron con una bolsa negra y, minutos después, penetraron unos sicarios armados y asesinaron a las cuatro mujeres y a los dos bebés.

The horror!, como decía el renegado capitán de los Estados Unidos, encarnado por el grandioso Marlon Brando, en *Apocalypse Now*, (1979) película extraordinaria de Francis Ford Coppola sobre la guerra en Vietnam, cuya historia está basada en un texto de Joseph Conrad (1899). The horror también ocurre hoy, a mediados de los años 20 del siglo XXI, en México.

El escritor y periodista Héctor de Mauleón escribió que, de acuerdo con Luis Abarca, coordinador del Comité Digna Ochoa Chiapas, en Tila, al norte de Chiapas, “lo que hace medio siglo comenzó como un conflicto político y agrario, terminó convirtiéndose en una disputa detrás de la cual se encuentran los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación: se trata de una pugna por el control de rutas, del tráfico de drogas y de personas, de extorsiones al transporte y del cobro de piso a locatarios y comerciantes, quienes han denunciado cobros de entre 50 mil y 70 mil pesos mensuales.” (El Universal, 11 de junio, 2024).

“Un total de 17 inmuebles fueron quemados y más de 21 vehículos vandalizados. Dentro de las ruinas de uno de los domicilios, el ejército encontró los cuerpos calcinados de dos personas” (de Mauleón, ídem.) La gente ha huido de su lugar, llorando, gritando y cargando con pocas pertenencias.

Abandonaron a adultos mayores y a sus animalitos. Suplican al gobierno que los cobije y ni Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, ni el gobierno federal protegen a los habitantes de Tila para que regresen a sus hogares.

Ante este horror, el presidente López Obrador explica que se trata de un enfrentamiento entre los mismos pobladores de Tila. Como opinó Tere Vale en un Tweet: “Ay caray, y por seguir en esto votaron 35 millones de mexicanos”.

Algunos críticos y comentaristas consideran que nuestra incipiente democracia, iniciada apenas con la creación del IFE, hoy INE, hace 33 años, por cierto impulsada por el presidente Ernesto Zedillo del PRI y muchos otros personajes de otros partidos y de miembros de la academia, recibe ahora una estocada, con las reformas que pretende el primer mandatario, un presidente que debería ser ya un “lame duck”, como se dice en inglés, un pato cojo, significado literal, que alude a su disminución de poder frente a la entrada de un nuevo, en este caso, nueva presidente.

Pero López Obrador se aferra al poder. Insiste en detentarlo con la futura presidencia de Claudia Sheinbaum.

En la fotografía que hoy fue portada del diario Reforma, vemos a Andrés Manuel LO apergollando con un brazo a Claudia Sheinbaum y plantándole un beso en la mejilla, cuando la recibió ayer en Palacio Nacional para que hablarán de la transición de un gobierno a otro.

La foto es reveladora de la convicción de que el que sigue y continuará mandando es él: “Aquí solo mis chicharrones truenan” parece indicarle el presidente a su “criatura”. También es una manera de acoso ese gesto, un “yo aquí soy el macho alfa y tú eres mi creación”.

Después del encuentro, Claudia Sheinbaum habló en el mismo lugar donde el presidente predica en sus Mañaneras. Tema principal de la plática que sostuvieron ella y AMLO residió en la reforma a la Constitución del Poder Judicial, que AMLO quiere imponer, haciendo que los jueces de la Suprema Corte sean escogidos por el inefable pueblo bueno y sabio, lo cual no sucede más que en Bolivia.

Como se sabe, López Obrador quiere un poder judicial a modo, decir a los jueces qué va y qué no va, como hizo con Arturo Zaldívar, el indigno jurista que complacía las peticiones del inquilino de Palacio Nacional, cuando ocupó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Andrés Manuel tiene tres ministras a su mandato: Loreta Ortiz, la plagiaria Yasmín Esquivel y la inepta Lenia Batres, pero desea más, mucho más, entre otras cosas, perdurar y continuar con el poder.

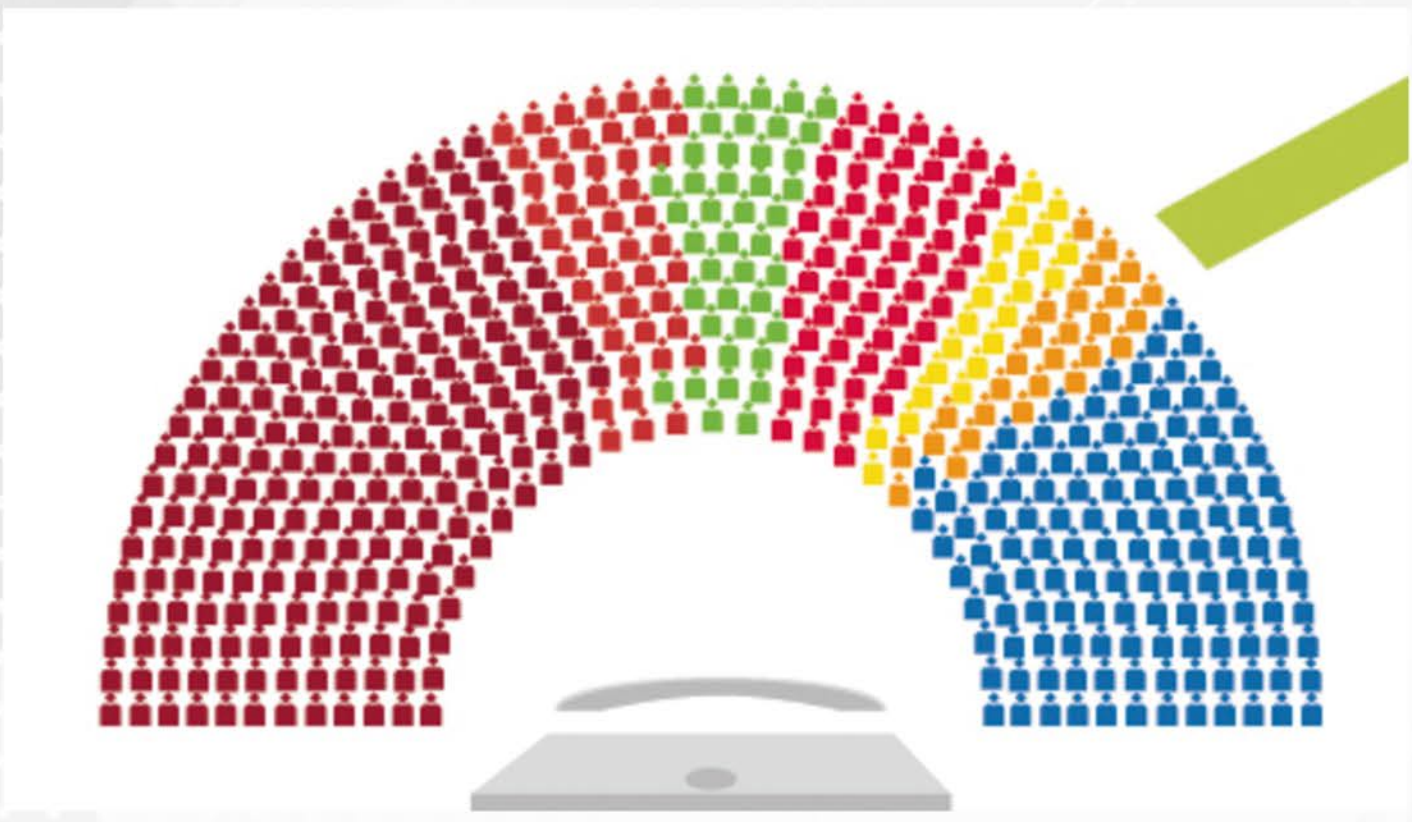
Su partido, Morena, como ganón de las elecciones, quiere perpetuar un fraude mayúsculo (aquí sí se vale llamarlo fraude) mediante la sobrerrepresentación en el Congreso. La Constitución indica que puede haber solamente un 8%. Los morenistas y sus aliados obtuvieron un 54% del voto ciudadano para la Cámara de diputados. La SEGOB, que no debería meterse, dice que tendrán un 73% de los diputados. Claudia Sheinbaum no parece que dará fast track a esta reforma ni a las otras que conforman el plan C del presidente.

La virtual presidenta propone consultar en todo el país para aceptar las modificaciones que a AMLO le urge imponer. Habló de un parlamento abierto, de que, en el caso del Poder Judicial, deberá discutirse en la barra de abogados y con otras instancias. En la Mañanera de hoy, el presidente le enmendó la página. Urgió a que se acepten sus reformas en la famosa ventana de septiembre.

Ojalá Sheinbaum tomara el timón para no quitar la autonomía al poder judicial ni al legislativo y que gobierne lo mejor posible. Ojalá que atienda el horror de la violencia y nos devuelva un sistema de Salud decente, aunque no sea como el de Dinamarca, entre otras muchas necesidades que LO desechó. Ojalá. De otra manera, el país entero acabará en el rancho de López Obrador que todos sabemos cómo se llama.

Sobrerrepresentación 2024: la trampa para abatir la democracia

Por *Ciro Murayama*



La coalición encabezada por Morena ganó las elecciones, pero no borró el pluralismo político de la sociedad mexicana. Aun así, el gobierno ha anunciado que lo que las urnas no le dieron, una votación suficiente para hacerse de la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, lo tratará de conseguir mediante una argucia legal para poder hacer realidad el llamado “plan C” y terminar con la división de poderes. Nada más y nada menos.

La Constitución general de la República, en su artículo 54, establece un límite a la sobrerrepresentación del 8 %, pero el gobierno busca darse un exceso de diputados sobre ese tope.

De acuerdo con los datos del cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), para la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 40.4 %, el Partido del Trabajo 5.4 y el Partido Verde 8.3, en total reúnen 54.1 % de los votos emitidos.

• Pero el miércoles 5 de junio, el día que iniciaron los cómputos en los 300 consejos distritales del INE en todo el país, en la conferencia matutina del presidente, la secretaria de Gobernación presentó un escenario de conformación de la Cámara de Diputados.

• Se trató, de entrada, de una clara invasión de las atribuciones constitucionales del Instituto Nacional Electoral. Pero, además, el gobierno anunció que su coalición estaría por recibir 372 diputados, el 74.4 %. Una sobrerrepresentación del 20.3 %. Un despropósito y un exceso autoritario.

• Ahora bien, si se estima la votación nacional emitida –restando los votos nulos, por candidatos no registrados e independientes y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que perderá su registro al no alcanzar el 3 % de los sufragios–, entonces subirá un poco el porcentaje que corresponde a cada uno de los seis partidos que sobreviven y que tienen derecho a diputados plurinominales. Así, la votación nacional emitida a favor de los tres partidos de la coalición gobernante sería de 57.9 %, es decir, 16.5 % por debajo del 74.4 % de diputados que Gobernación pretende. Se trata de una violación por más del doble del límite impuesto por la Constitución de hasta ocho puntos porcentuales.

La Tabla 1 muestra cómo la pretensión de gobernación es inflar el peso de los tres partidos de la coalición gubernamental y reducir el peso de los votos por los tres partidos opositores que conservan su registro al traducir esos sufragios en curules.

La distorsión de la voluntad popular sería enorme. Implicaría que la segunda fuerza política más votada, el PAN, tuviera menos diputados que el PVEM aunque tuvo más del doble de sufragios ciudadanos.

Se estaría sobrerrepresentando tanto al Verde hasta el grado de convertirlo en la segunda bancada aunque es la quinta fuerza en votación popular. Sí, al quinto lugar se le daría el segundo grupo parlamentario más numeroso.

Y el partido con registro menos votado en el país, el PT (con 5.8 % de la votación nacional emitida) se le otorgaría la cuarta bancada, con más legisladores que el PRI y Movimiento Ciudadano que recibieron muchos más sufragios populares.

Tabla 1.Escenario de sobrerrepresentación por partido

	Porcentaje de votación nacional emitida (datos PREP) (A)	Diputados según SEGOB	Porcentaje diputados (B)	Sobre subrepresentación (B-A)
PAN	18.3 %	70	14.0 %	-4.3 %
PRI	12.0 %	33	6.6 %	-5.4 %
PVEM	8.9 %	75	15.0 %	6.1 %
PT	5.8 %	50	10.0 %	4.2 %
MC	11.7 %	23	4.6 %	-7.1 %
MORENA	43.2 %	247	49.4 %	6.2 %
OTROS	No aplica	2	0.4 %	
	100 %	500	100 %	0

Fuente: Elaboración propia a partir del PREP del INE y “mañanera” del 5 de junio.

Nota: Otros se refiere a un diputado del PRD y un independiente, que no se contabilizan para la votación nacional emitida.

Se trataría de un ejercicio para sobrecargar el peso de los votos, al traducirlos en curules, del gobierno y de comprimir al mínimo los votos populares depositados a favor de la oposición. Sería atentar contra el principio de igualdad del voto en que se sustenta la democracia, un claro contrasentido.

Para soportar esa treta, sus impulsores dicen que el límite de ocho puntos en exceso de la Constitución sólo aplica a partidos y no a coaliciones. Pero omiten decir que cuando la cláusula contra la sobrerrepresentación se incorporó a la Constitución en 1996, la ley electoral reglamentaria, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), señaló en consecuencia y de forma meridiana en su artículo 60, párrafo 4: “A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido”. Al ser una coalición tratada como partido, la disposición constitucional aplica para ambos. Eso nunca se modificó.

Hubo después una reforma secundaria, menor, para evitar el trasvase de votos que consistió en que los emblemas de los partidos coaligados aparecieran separados en la boleta electoral. Pero jamás el constituyente ni el legislador establecieron que eso quería decir que las coaliciones fuesen un salvoconducto para violar la cláusula constitucional, que sigue del todo vigente y debe ser aplicada.

Al Consejo General del INE le corresponderá, a inicios de agosto y una vez que el Tribunal Electoral haya concluido todos los juicios por impugnaciones a la votación en casillas y distritos a la Cámara de Diputados, hacer la distribución de los diputados plurinominales.

Esa decisión, como todas las del INE, podrá ser revisada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son el INE y el Tribunal quienes deberán hacer valer la Constitución por encima del interés del gobierno de hacerse de una mayoría calificada que las urnas no le concedieron.

Permitir una sobrerrepresentación por encima del límite constitucional, para construir artificial y tramposamente una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, puede ser la antesala de la demolición del orden constitucional vigente, que considera la separación de poderes, la autonomía de las autoridades electorales y la independencia de los poderes Legislativo y Judicial frente al Ejecutivo.

Es el régimen democrático lo que se pondría en grave peligro.
Ciro Murayama. Economista. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Coautor, junto con Lorenzo Córdova del libro La democracia no se toca (Planeta, 2023).

LA REFORMA Y UNA JUSTICIA CONTAMINADA

Por Jorge Fernández Menéndez

El presidente López Obrador quiere gobernar hasta el último día. Nada de las pacíficas transiciones del poder de las que él mismo gozó durante la de 2018. El Presidente no quiere reformar el Poder Judicial, quiere deconstruirlo, convertirlo en un poder subordinado.

Y ajustar cuentas con un poder que no pudo controlar plenamente durante la segunda mitad de su sexenio. Las acusaciones de corrupción, de falta de representatividad democrática y de que el Poder Judicial está comprometido con factores de poder contaminan todo el sistema de justicia.

En el camino no importa si se destruyen carreras judiciales forjadas a lo largo de años de trabajo, si la propia impartición de justicia se torna institucionalmente inmanejable, incluso si su decisión boicotea el gobierno de su sucesora.

Decir que no importa la reacción de los mercados era válido en el siglo XIX, no en la actualidad; que la reforma se consultará, pero que se aprobará como está planteada, sería desastroso para una administración que quiere mantener la estabilidad financiera, una economía próspera y la confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros.

Lo que priva es una campaña que contamina todo el proceso de impartición de justicia y, por ende, paraliza el sistema. ¿Quién puede tener confianza y certidumbre hoy en las decisiones judiciales si se pueden tomar para congraciarse o enfrentarse con una de las partes en conflicto en un proceso donde pareciera que las decisiones ya están tomadas?.

La percepción de corrupción y falta de imparcialidad en el Poder Judicial, impulsada por esta campaña, mina la confianza en las decisiones judiciales, especialmente en un contexto donde, tanto el presidente López Obrador como la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han señalado deficiencias y posibles actos de corrupción dentro de la SCJN.

En este contexto, se termina cuestionando la validez de las resoluciones emitidas por los ministros de la SCJN, pero también por los diversos actores del sistema.

Si se hace una consulta seria a especialistas, como propone Claudia Sheinbaum, es muy probable que las barras de abogados, las escuelas de derecho y el sector académico no acepten la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Es como decidir por votación popular quiénes serán los cirujanos en jefe de los hospitales públicos. Son más de mil 700 cargos del Poder Judicial que estarían disponibles al mejor postor, a quien pueda hacerse de esas candidaturas. Ninguna democracia del mundo tiene un sistema de ese tipo.

Tampoco es verdad que de esa forma se evita la corrupción, como si no la hubiera en los funcionarios electos por cargos de elección popular que ocupan áreas ejecutivas y legislativas.

La corrupción se combate con sistemas eficientes de control que, en este caso, se tienen que imponer desde el Consejo de la Judicatura. La idea de la elección de jueces por votación popular, como único punto no negociable de la propuesta de reforma, sin abarcar aspectos que son nodales, como el Consejo de la Judicatura, la carrera judicial, los mecanismos para hacer más eficiente y más transparente el propio sistema, hacen el debate, como tal, casi intransitable.

Hay que insistir en un punto: el Poder Judicial sí necesita una reforma y una reforma profunda en muchos ámbitos. Pero, primero, una reforma de esas características no se realiza de un golpe y en semanas, deberá abarcar, por lo menos, todo un sexenio: la reforma que se aprobó durante el gobierno de Calderón y donde mucho tuvo que ver el propio Arturo Zaldívar se implementó a lo largo de ocho años. Y logró mejorar, por lo menos en el ámbito federal, el sistema de justicia. Segundo, se deben reformar a fondo los sistemas de justicia locales que, salvo algunas excepciones, es donde hay mayores problemas. Eso no se hace en un día o en semanas.

La validez de las resoluciones judiciales es fundamental para el Estado de derecho, por lo que, mientras se implementan reformas, es crucial mantener un equilibrio que permita la continuidad del sistema judicial sin comprometer su integridad ni su capacidad para actuar imparcialmente. Cualquier cambio en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial debe ser implementado de manera tal, que fortalezca la confianza en las instituciones y garantice que las futuras resoluciones judiciales se dicten de acuerdo con los estándares de justicia y legalidad que la sociedad exige. Hoy, eso está comprometido.

Insisto en un tema. Las decisiones drásticas que se toman en las últimas semanas de ejercicio de poder suelen ser las peores, porque los mandatarios salientes están pensando en su legado, en la historia. No hay mejor ejemplo que José López Portillo estatizando la banca en septiembre de 1982, con costos políticos y financieros enormes, de los que no se pudo deshacer Miguel de la Madrid en todo su sexenio. Y los que recordamos aquellas escenas, recordamos al sucesor, a De la Madrid, aplaudiendo, aunque fuera a regañadientes, aquella decisión presidencial y, en los días siguientes, vimos el Zócalo lleno de manifestantes que festejaban la “nacionalización” de la banca (que fue estatizada porque ya era nacional, sólo se expropiaron los bancos de propietarios mexicanos, los extranjeros no fueron tocados). Fue un error que se tomó en unos días pensando en un legado, pero que le costó años al país para amortizarlo.

Por lo pronto, la confrontación y la dinámica de la campaña actual en torno a la reforma judicial nos deja en un plano de profunda incertidumbre judicial, con decisiones que no sabemos si se toman con base en leyes o en tomas de posición en torno a ese conflicto. Quizá poner en pausa muchas de ellas no sea una mala idea.

EL PELIGRO DE LA REFORMA JUDICIAL

Por Bibiana Belsasso

Los días de mayor riesgo para México son a partir del próximo 1 de septiembre que se instale la nueva legislatura, en la que Morena y sus aliados tendrán “carro completo”, hasta el 1 de octubre que asuma Claudia Sheinbaum la Presidencia de la República.

Lo que mayor incertidumbre genera es la posible nueva reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Si algo tiene nerviosos a los ciudadanos, a los mercados y a los inversionistas en México es esta reforma que ha anunciado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para poder matizar un poco el temor, la virtual Presidenta electa aseguró que esta semana estarán listos los resultados de las tres encuestas nacionales que Morena mandó a hacer para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma al Poder Judicial.

Esta reforma busca que, así como el Ejecutivo y el Legislativo, los integrantes del Poder Judicial sean electos mediante el voto popular, como lo propuso el Presidente el pasado 5 de febrero. Sheinbaum Pardo consideró importante que se realicen parlamentos abiertos para perfeccionar la reforma, incluso con la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según expertos en el tema, y aunque reconocen que el sistema judicial es perfectible, escoger jueces y magistrados por voto popular sería de un riesgo enorme para la certeza jurídica del país. Para ser parte del Poder Judicial de la Federación se necesita una preparación adecuada. Para empezar, haber estudiado leyes.

Además, hay una ventana enorme para corromper la justicia. ¿Quién va a financiar esas campañas, que terminarían siendo algo muy similar a las campañas políticas? ¿Empresarios que tengan juicios pendientes? ¿Ciudadanos con más recursos que otros, quienes necesitan que la justicia falle a su favor? O incluso se corre el riesgo de tener dinero del crimen organizado en esta forma de elegir a los trabajadores del Poder Judicial.

La propuesta del Ejecutivo federal es que se elija a los ministros de la Suprema Corte, miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados de circuito y jueces de distrito. En total serían más de mil 600 cargos y la primera elección para seleccionarlos sería en junio de 2025.

También se propone crear un órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituya al CJF, con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.

Otra idea de la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador es reducir el número de ministros de la Suprema Corte, quiere restar dos miembros, es decir, quiere que de 11 ministros pasen a ser nueve.

Lo que es esta reforma es una clara confrontación de López Obrador con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, y con los ministros que no han aprobado ciertas reformas del mandatario. La Corte ha sido de los muy pocos contrapesos con los que se ha topado el Presidente.

La Barra Mexicana y el Colegio de Abogados ha dicho ya que les gustaría participar en los foros de discusión de la Reforma Judicial, ya que consideran que dicha propuesta “no atiende a los problemas de justicia penal, familiar, civil o laboral, ni plantea soluciones a los problemas de creciente impunidad que vivimos en el país”.